

## **La estrategia del Estado Mexicano ante su crisis.**

### **La burla del interés privado hacia la sociedad.**

*Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno.*

E. Zapata

*“Se han desbordado los diques de la sociedad moderna. La libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad son figuras de cristal con las que el individuo rema amargamente sobre los ríos de la barbarie.*

*En nuestros días, los robustos y presuntuosos edificios de la institucionalidad atraviesan por la mayor ignominia colectiva y la deslegitimidad más crítica. El fraude, la estafa, la extorsión, el homicidio, el lavado de dinero, el secuestro, la corrupción, el crimen, la delincuencia oficial, el feminicidio, la injusticia, la impunidad y la multiplicidad salvaje de actividades inhumanas se incrustan en la sociabilidad actual de manera sistemática... Un liberalismo político obsoleto, superado por los acontecimientos y procesos sociales que él mismo ha desencadenado [...] maniatado por contradicciones desbordantes [...] es arrojado al siglo de oro anterior por el propio ciudadano...”*

CDAM-CHE GUEVARA (2011)

### **Introducción**

Los acontecimientos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, y en Ayotzinapa, Guerrero, en agosto y septiembre respectivamente en nuestro país, han provocado una crisis política que corroe la legitimidad, representatividad y la propia “governabilidad” del Estado Mexicano. La envoltura político-institucional del Estado –de una democracia y de un Estado de derecho– no ha sido suficiente para generar un consenso social entre las fracciones de clase dominantes y las fracciones propietarias desfavorecidas, las pequeñas

burguesías y las clases dominadas. El “pacto por México” que incluyó once “reformas estructurales”, entre las que destacan la laboral y la energética, no hacen más que profundizar el patrón de acumulación vigente en México desde la década de los ochenta, conocido comúnmente como neoliberalismo. Este patrón de acumulación ha requerido toda una reorganización estructural de la sociedad con el fin de que su metabolismo gire en torno al mercado mundial y despreciando las necesidades más elementales de la población. Sin embargo, la contraparte de esto son las profundas contradicciones al interior de la sociedad mexicana: exclusión económica y social, desigualdad social, precarización e informalidad laboral, pobreza, migración, rompimiento de los lazos sociales, violencia social, devastación del medio ambiente. De esta forma, las reformas y los “pactos” (en las alturas) llevados a cabo en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto no son suficientes para superar las contradicciones sociales que genera este patrón de acumulación orquestado y organizado por el propio Estado.

En este sentido, el fracaso de la política liberal por generar el consenso social hace patente, por tanto, el lado oscuro del Estado –que los liberales conocen pero que enmudecen convenientemente cuando debe salvarse la reproducción del capital–: el carácter represivo y autoritario del Estado. Todo Estado, incluido el capitalista que posee una “autonomía relativa”, es un Estado *de clase* y una de sus características es ser la *violencia organizada de clase*. Las contradicciones sociales y las luchas de clases originan que el aparato de estado mantenga siempre en su interior cuerpos represivos, hoy denominados civilizadamente cuerpos de “seguridad nacional”, y que en todo momento operan y realizan los trabajos sucios para la buena reproducción del capital: fusilamientos, desapariciones forzadas, hostigamientos, espionaje.

En este sentido, los acontecimientos de Tlatlaya y Ayotzinapa se suman a toda la ola de violencia social desatada desde el sexenio anterior, donde el Estado es el reproductor directo de esta violencia. La propia política liberal, encaminada a generar el consenso social de tan brutal patrón de acumulación de capital, topa así con los límites impuestos por semejante tarea, lo que origina que el Estado recurra a la represión, los asesinatos y las desapariciones a través de sus cuerpos represivos con el fin de profundizar la reproducción del capital.

Por tanto, el Estado mexicano se encuentra hoy en una crisis política que afecta la gobernabilidad, representatividad y legitimidad, pero esta crisis es causada por su propio accionar en la sociedad mexicana, lo que lo obliga a anunciar (en medio de la publicación de reglamentos sobre la estratégica “reforma energética”) un *Pacto por el fortalecimiento del Estado, la seguridad y la plena vigencia del Estado de Derecho*. Véase el anuncio de EPN realizado este lunes 3 de noviembre de 2014, mismo que operará como bandera oficial hasta el fin de su mandato. Sin embargo, lejos de intentar resolver las contradicciones sociales que origina la imposición de este patrón de acumulación a la sociedad, el Estado mexicano asume ahora una vergonzosa política de *gatopardismo* como estrategia para superar la crisis, pues con el objeto de recrear su destrozada imagen al interior como en el exterior del país, pretende operar una estrategia de “cambios de fondo” para dejar en el “fondo” todo igual.

De esta forma, para el Estado, intentar resolver los crímenes y desapariciones de Tlatlaya, Ayotzinapa y la violencia social que azota al país, así como intentar frenar las tendencias que los provocan por la vía de la política liberal y sus instituciones –mesas de diálogo, ley de víctimas, comisiones de investigación– es imposible. Pues estos acontecimientos son efectos inherentes a las contradicciones sociales generadas por su propio actuar en la sociedad mexicana. Ante esto, la sociedad mexicana requiere frenar este genocidio neoliberal e impulsar cambios estructurales, pero estos cambios solo pueden ser impulsados por una lucha radical de clases, que a su vez necesita una previa organización de clase y popular.

A continuación, exponemos cinco puntos con los cuales analizamos lo aquí mencionado.

## **I. El proceso de acumulación de capital y la fragmentación social en México**

La crisis de violencia social en México se desborda dentro del curso de graves contradicciones que la forma social de acumulación y reproducción de capital conocida como neoliberalismo tiene como núcleo fundante. En 2011, analizamos la profundidad de esta tesis y señalamos que el proceso de contrarrevolución neoliberal que se impuso en la sociedad mexicana en las últimas décadas ha conducido a graves fracturas y procesos de

desarticulación social que han transformado al país y sus formas establecidas de vida cotidiana en un curso irrefrenable de ríos de sangre emanados por la explosión de la violencia social.<sup>1</sup>

Crecientes, y cada vez más peligrosas, condiciones de desigualdad –productiva, de ingreso, territorial, educativa, laboral, entre muchas otras– deterioraron la vida en común y erosionaron mecanismos de solidaridad en las relaciones sociales del país. La forma de reproducción social que la lógica del capitalismo en México impuso fue aquella que estableció el incesante incremento de la *mercantilización* de los derechos, servicios y condiciones vitales y no vitales de la vida social. Como señalamos en aquel momento, el patrón de reproducción de capital diseñado y constituido por los grupos dominantes del país, lo que se denomina *bloqueo en el poder*, estableció nuevos ejes de acumulación capitalista que dieron por resultado procesos de fragmentación social, desindustrialización, privatización y desnacionalización de la economía.

Han sido múltiples las consecuencias sociales provocadas por este patrón de acumulación de capital en México: desempleo, contención salarial, exclusión social, precarización e informalidad laborales, superexplotación del trabajo –en la industria ensambladora, en los servicios, en el campo–, desertificación del agricultura mexicana, incremento de la pobreza, y la necesidad de exportar fuerza de trabajo a Estados Unidos –mediante los más crueles procesos de migración–, para la sobrevivencia de las familias mexicanas con el envío de sus salarios en dólares, entre muchas más. En suma, las clases trabajadoras y campesinas de México padecen las consecuencias de una ofensiva agresiva del capital contra el trabajo, semejante a la que se vivía en el capitalismo del siglo XIX, pero ahora en pleno siglo XXI.

En general, la radical rotación de los grandes capitales nacionales y extranjeros a la producción de bienes y valores de uso para los mercados internacionales –principalmente el estadounidense–, la especialización productiva que esto obliga y las consecuencias desastrosas en los procesos productivos nacionales y en el consumo popular, excluyen de la apropiación de la riqueza producida socialmente a millones de mexicanos que quedan a la deriva y en los márgenes de la sociedad. Aunado a esta ley de exclusión económica y

---

<sup>1</sup> Véase nuestro trabajo *Fuentes y figuras de la violencia social en México: Neoliberalismo y dominación política de clase*. Cuadernos CDAM, No. 6, Junio de 2011: <http://www.rebellion.org/docs/131832.pdf>

social, los crecientes procesos de mercantilización social y competencia rompen y fragmentan los lazos sociales, lo cual se traduce en procesos de atomización social brutales y competencia a muerte. Así, la violencia social que vive México, es consecuencia directa de una violencia política y económica que ejercen las clases dominantes del país y el capital extranjero al conjunto de la sociedad mexicana y que el Estado reproduce.

Así, la estrategia política de introducir al ejército en las calles en la llamada lucha contra el crimen organizado y echar a andar múltiples campañas de publicidad a favor de los cuerpos policiacos y militares, no es más que una estrategia para filtrar estos cuerpos represivos más y más al interior de la sociedad mexicana y posicionarlos en puntos cruciales en los que los fracasos de la política liberal obliguen a reprimir a la inconformidad y protesta social. Los procesos de violencia y despojo neoliberal así lo requiere, más aún, dentro de las estrategias centrales de impulso a la *elevación de la tasa de ganancia* y de la *aceleración de la acumulación de capital*, como es el caso de las estrategias actuales del Estado mediante el desarrollo de la productividad y competitividad en el país y de las reformas estructurales que lo potencializan.

En este sentido, los crímenes de Tlatlaya y Ayotzinapa y tantos otros silenciados por los medios, son parte del genocidio neoliberal en México y parte a su vez de las contradicciones de la barbarie del capitalismo mexicano. Para los sectores populares que buscan organizarse contra semejantes atrocidades, el fusilamiento sin previo juicio, las desapariciones forzadas y el encarcelamiento no tienen otro fin más que el infundir terror, desarticular violentamente, aplastar las luchas sociales e inmovilizar a la sociedad. Ante ello, surgen por tanto las interrogantes de ¿en dónde queda entonces el avance de la democracia liberal, el “bienestar”, la “seguridad social”, los “derechos humanos”? ¿Dónde quedan pues las banderas ideológico-políticas de las clases dominantes: el llamado “Estado de derecho” y la democracia liberal?

## **II. La enésima reedición de la sociedad civil**

En las tensiones sociales, el Estado aparece a la luz pública como un cuerpo con intereses propios, organizando en paralelo el devenir de la sociedad por medio de procurar la productividad, encaminar la reforma laboral, echar a andar la reforma energética y la reforma política. A su vez, para la ideología popular este Estado obedece a los intereses de

las clases dominantes en donde participan el duopolio televisivo, el narcotráfico, grandes transnacionales, partidos políticos (PRI-PAN-PRD y hasta MORENA). Por otra parte, para un sector de la ideología dominante –la liberal– el Estado *debe ser* el “árbitro” imparcial en donde se dirimen distintos intereses en una sociedad; lo único que debe hacerse es hacer prevalecer el Estado de derecho. No obstante, el discurso dominante que se ha venido construyendo e imponiendo mediante la ideología liberal, como una de las ideologías más efectivas del capital, nuestra coyuntura nos impone despejar toda duda sobre el verdadero rostro del liberalismo actual y su propuesta política: su interés de clase por ocultar las contradicciones profundas que el neoliberalismo configura.

En este sentido, a la luz de nuestra historia reciente, volvernos a cobijar con una salida liberal en la que se fomenta la organización de la “sociedad civil”, por más radical que parezca, es ya insostenible. Debe quedar claro que el Estado está organizado y penetrado por *intereses de clase* –inamovibles para el bloque en el poder– que imposibilita atacar los problemas desde su raíz y en todas sus dimensiones.

Es la lógica del interés de clase lo que ha conducido al Estado a una llevar a cabo una estrategia represiva y, por otra parte, a echar andar sus propuestas adormecedoras y paliativas de “reconstruir el tejido social” mediante mesas de diálogo, apertura de comisiones legislativas, leyes de víctimas, campañas informativas de “renovación del Estado” y de “Reforma política”. En suma, estos últimos elementos son sólo mecanismos de cooptación para las masas de inconformes adheridas a la llamada “ciudadanía” y la “sociedad civil” o, mejor dicho, son mecanismos de incorporación del *accionismo social* a la política oficial (procesos de despolitización), mediante los cuales administra el conflicto social y lo lleva al terreno institucional. Por tanto, esto ha tenido únicamente como resultado el desplazamiento de las contradicciones, la reconstrucción de la cohesión social y la continuidad de la gestión de la forma dominante de reproducción del capital: limpiar el camino para que el bloque en el poder pueda enriquecerse sin importar el costo social y natural que representa para la mayoría de la población.

Así, el fracaso de la política liberal ha dado por resultado el resquebrajamiento del consenso. Ante ello, el Estado intenta lanzar una vez más la reedición de una “sociedad civil” con la cual pueda dirimir y mediar su propia crisis política. A través de una nueva

versión de la “ciudadanización de la política”, el bloque en el poder pretende restaurar el obscuro entramado de la democracia mexicana y salvar el fisurado y desbordado “Estado de derecho”. El acuerdo que promueve el Estado hacia la “sociedad civil” es el “cemento” que requiere para desplazar las contradicciones y “renovar” su propio cuerpo político. Hacia ello apunta el “gran acuerdo” que el Estado encabezado por Enrique Peña Nieto busca establecer a partir de los acontecimientos de septiembre.

Los últimos gobiernos de México, afanados en mantener la fachada de un Estado democrático que le permitan al bloque en el poder (nacional y sobre todo extranjero) enriquecerse en paz y tranquilidad, requieren amalgamar procesos de legitimidad constantemente debido a la agresividad social del neoliberalismo. La legitimidad consiste en imponer el interés del bloque en el poder como interés “nacional” mediante distintos mecanismos de consenso como han sido los pactos, acuerdos, cooptación del descontento, canalización de la protesta social entre otros. Pero en medio de los efectos sociales que acarrea la locomotora neoliberal, la cara oscura de la misma moneda está presente en todo momento: la violencia del Estado. En este sentido, no es de sorprenderse que la militarización del país sea una de las tareas principales del Estado mexicano en la actualidad. Estas labores no hacen más que reproducir el interés práctico de las clases dominantes, es decir, en aras de la ganancia no buscan racionalizar el proceso en el que están inmersas, sino únicamente buscan despejar el camino para continuar enriqueciéndose. Así, el Estado mexicano no busca corregir estructuralmente las causas de la violencia social, sino emplea todos sus recursos disponibles para “solucionar” las consecuencias y despejar el camino para la realización de la plusvalía.

Ejemplo de ello es que en localidades y territorios específicos, como las que incluyen riquezas naturales (Agua, minerales, materias primas, energía) valorizables para el capital, y en coyunturas cruciales, el aparato represor del Estado (legal e ilegal) ha estado y estará presente para apagar y extirpar el descontento social.

Ante este actuar bifacético del Estado, los ideólogos del liberalismo ponen el grito en el cielo, pues desde su perspectiva el retroceso hacia un pasado antidemocrático late constantemente, pues bien, el Estado capitalista mexicano nunca ha excluido esta posibilidad autoritaria, y quien mejor que el experimentado PRI para cumplir con la tarea

del actual bloque en el poder. Difícilmente el Estado mexicano adoptara una cara democrática en medio de la catástrofe neoliberal.

Se busca, por tanto, una actualización de la fetichización de la sociedad civil que reproduzca la ilusión de la política liberal. Sin embargo, esto tiene frente así profundos límites. Se trata de las diversas contradicciones de una sociedad atravesada por la concentración privada de los capitales, la centralización del poder político, el desmantelamiento de la seguridad y política social, la transformación del fondo de consumo obrero y popular en fondo de acumulación de capital, la atroz competencia neoliberal en todos los órdenes, el despojo territorial y de sus recursos, la ruptura social, la proliferación de inmensas desigualdades y los procesos de desarticulación y descomposición social consecuentes.

### **III. Los caballos de batalla del bloque en el poder**

Ante la crisis que experimenta el Estado mexicano, evidenciada una vez más con el asesinato en Tlatlaya y la desaparición forzada de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa –como parte de la mayor crisis social derivada del proceso de acumulación de capital en México–, el Estado y las clases que dominan el diseño capitalista de la sociedad mexicana asumen su disposición para *renovar y fortalecer las instituciones del Estado*. Lo relevante de esta nueva maniobra es que tiene la claridad y peculiaridad de asumirse como *eco directo* de los intereses empresariales (*México Cumbre de Negocios*, 26 de octubre 2014), verdadera clase que detenta el poder político en el país pues tiene la capacidad de imponer intereses económicos, políticos y subjetivos hacia las distintas clases sociales.

La respuesta del Estado Mexicano a la crisis *política*, de *legitimidad*, de *representatividad* –que echa por tierra el discurso y funcionamiento de los aparatos materiales del Estado construidos mediante la ideología de la “transición a la democracia”, el “Estado de Derecho” y el “Pluralismo político”– y a la crisis “humanitaria” y de violencia social, en suma, al terror de Estado, vuelve a situar la crisis fuera de sus raíces fundantes.

Ante una compleja realidad social constituida por caracteres *sistémicos* y *estructurales*, el Estado procesa su terror como un “problema”, lo redimensiona como un

“expediente” y lo reordena dentro de un “marco” o “materia” institucional. La estrategia es simple: asumirse en su idealidad, en su *deber ser*, y mandar a segundo plano lo que *es*. Negando el carácter económico estructural social de la crisis social y estatal en el país, el crimen de Estado lo focaliza en asunto de “seguridad”, más aún, de carácter jurídico (el “Estado de Derecho”) y “ético”, o también, de carácter individual (el ciudadano) e intersubjetivo. Las disposiciones oficiales, ahora plantean incluso un desplazamiento hacia el ámbito “electoral”, ya que al decir de otros funcionarios del Estado se trata de que “los institutos electorales” garanticen al ciudadano funcionarios “íntegros” (Miguel A. Mancera). Otra parte del personal de Estado propone “un pacto por la seguridad con el Presidente y los gobernadores” (Graco Ramírez). Personeros del capital y de los negocios, intentan así concebir la crisis como una “crisis de confianza” en la que “hoy es el momento más oportuno para subrayar la confianza en las instituciones y las instancias superiores” (Miguel Alemán Velasco, México Cumbre de negocios, octubre 2014).

En medio de la altísima desigualdad y de la gran concentración de riqueza –sólo 136 empresas concentran alrededor del 50% del PIB–, el ex gobernador y empresario Miguel Alemán Velasco nos dice que lo que se debe aplicar es una “renovada ética de alto espectro”, pues una vez satisfecha la exigencia del capital con las reformas estructurales y su oportunidad de valorizar el capital “el gran pendiente en México es la Seguridad” (Claudio X. González).

El personal del Estado plantea incluso “depurar los cuerpos policiacos” y llevar a cabo una “coordinación entre los diferentes niveles de gobierno” que lleven a la mejora del “clima de seguridad” en el país (Graco Ramírez). Eruviel Ávila, aplaude la propuesta del gobierno federal para crear un “organismo anticorrupción a nivel nacional”, incluso habla de una “capacitación” y “homologación de sueldos de policías” o incluso hay quien plantea su “Certificación”.

Según los propios gobernadores de diferentes Estados, a pesar de lograr “incentivar la mirada de inversionistas extranjeros”, los acontecimientos recientes en Tlatlaya y Ayotzinapa han “afectado la imagen del país”. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ha señalado que “no puede ser que por la irresponsabilidad gubernamental y municipal se esté afectando la imagen de México”.

De esta forma, el Estado enfoca nuevamente todos sus recursos para solucionar el problema en sus efectos, más no en sus causas. Sin embargo, esto no lo hace por ineptitud o disfuncionalidad, por el contrario, lo hace en función directa de no alterar los intereses centrados en la forma de reproducción del capital y dominados por el bloque en el poder.

#### **IV. El *gatopardismo* siniestro del Estado**

Como hemos visto, el Estado en su estadio neoliberal está desbordado por las contradicciones que ha construido mediante el diseño económico-social que estableció como forma de acumulación a fin a los grandes capitales agentes del capitalismo mexicano.

Frente a las contradicciones económicas y políticas que azotan la violencia, frente al colapso del Estado y la expresión de una crisis política –de representatividad y de gobernabilidad–, y frente a la conmoción que de esta crisis en el exterior –que barre el “*mexicanmoment*” del FMI–, el Estado y la clase dominante ofrecen la nueva construcción de un *gatopardismo* descomunal caracterizado por dejar incólume las bases de la reproducción del capital y de la fractura social que atraviesa al país.

Desde el interior del orden político neo-liberal, no existe alternativa posible a las bases del interés individual y de clase: la propiedad, la ganancia, la competencia, el capital extranjero, el saqueo. En suma, se trata de relaciones sociales alienadas y establecidas sobre los fundamentos de la explotación y el despojo. Por tanto, para el bloque en el poder y el Estado, no hay alternativa alguna a estas leyes de un metabolismo económico y social que los grupos predominantes en el país personifican y, por lo mismo, no están dispuestos a tocar ni con el pétalo de una rosa sus intereses. Su principal divisa es *¡Después de mí, el diluvio!*

Es por ello que ahora se plantea restablecer las bases de un Estado mediante la “construcción de acuerdos” –exclusivamente entre ellos–, con “nuevos” fundamentos que apunten hacia un Estado “fuerte” y “legítimo”, ello con el principal interés del fanatismo neoliberal de la acumulación y apropiación ampliada del capital como tierra prometida con las nuevas reformas estructurales.

El nervio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que aglutina múltiples empresas y distintos organismos económicos patronales –que juntas representan

más del 40% del PIB–, lo lleva a buscar un “gran pacto” por una “seguridad” que garantice una gran “certidumbre a los agentes económicos”. (*Pacto por el fortalecimiento del Estado mexicano*, CCE, 29 de octubre, 2014). El horror que la cúpula empresarial le tiene a las convulsiones sociales –que le cuestionen la gran concentración de la propiedad y las relaciones sociales que la han construido– lo arrastran hacia la constitución de nuevas “fortalezas” de un Estado capaz de barrer y desarticular cualquiera de los obstáculos o perturbaciones al “clima propicio” para *valorizar* las “reformas estructurales”, entre otras, la monumental riqueza energética y la gran ofensiva laboral.

Como puede apreciarse, las bases, el interés y los objetivos de los “grandes” y “nuevos” “pactos” que se despliegan encaminadas hacia la “fortaleza institucional del Estado” y del “Estado de Derecho”, no residen en un cambio sustantivo para el desmantelamiento de las condiciones que generan la violencia y la desigualdad social, ni mucho menos para el desmantelamiento de las condiciones estructurales económicas y políticas que tienen en crisis al Estado y a la sociedad, sino que, exclusivamente buscan defender la “imagen” del país para los *inversionistas* una vez “logradas las reformas económicas”. Este es el carácter de “urgencia” del bloque en el poder por una *renovación institucional* por la seguridad.

La expoliación, el despojo, los procesos de superexplotación y las múltiples condiciones de desigualdad entre las clases que conforman la sociedad, así como la enérgica fragmentación y ruptura económico social que atraviesa a la sociedad mexicana serán –como hasta ahora– condición *permanente* dentro de los nuevos procesos de “renovación” del “Estado de Derecho” y de sus procesos de “fortalecimiento” gatopardista.

El nuevo plan de la clase dominante confeccionado desde las cúpulas empresariales hacia el Estado es macabro porque se centra en aquella pieza maestra por todos conocida que *Lampedusa* –El gato pardo– develó del poder: *hay que cambiarlo todo para dejarlo todo igual*.

Digámoslo sin reservas: a ello apunta toda la jerga institucional y empresarial que convoca a la “renovación” y “fortalecimiento” de las instituciones del Estado. Mediante la retórica de “cambios de fondo” (E. Peña Nieto) buscan horadar los temas de “seguridad”, “governabilidad”, “justicia”, “Ley anticorrupción”, “Estado de derecho”, “combate a la

impunidad”, “rendición de cuentas” y establecer. Asimismo, con ello buscan un “nuevo pacto” entre instituciones, partidos, órdenes de gobierno, empresarios y “sociedad civil”. En lo sustancial, se trata de un “gran pacto” en temas de “seguridad” para salvaguardar la “actividad económica” y la “implementación” de las “Reformas más importantes en décadas”, de acuerdo con el CCE, esfera a la que confiere la mayor *centralidad estratégica* de los intereses de las clases dominantes del país.

Mediante el nuevo discurso empresarial manipulador y la acción estatal, se busca darle un sentido cohesionador a la crisis política –que afecta la gobernabilidad, legitimidad y representatividad– que envuelve al conjunto de instituciones del Estado, instituciones que han sido emanadas de la construcción formal de la “democracia política mexicana” anclada en el discurso ideológico de la “transición a la democracia”.

Paradójicamente, fue con el discurso formal de “tolerancia”, “pluralismo” y “apertura democrática” que el Estado construyó desde las últimas décadas de siglo XX una fuerte y real *centralización política* que volvió *impenetrable* los reales centros de poder, el ejercicio del poder y de quienes lo ejercen. Los distintos agentes, partidos políticos e instituciones –que desde un principio formaron parte de la “transición política mexicana”– se coludieron con esta nueva forma de régimen autoritaria de la democracia mexicana. Democracia caracterizada por una gran fractura y exclusión económico-social y por una “inclusión” burocrático-política *exclusiva* para personal de Estado, capas burocráticas, organismos electorales –sin eficacia alguna en las relaciones de poder de clase– y agentes de interés anticlasistas.

Al mismo tiempo de la construcción del “nuevo régimen político mexicano”, se llevó a cabo la más profunda *separación* y *fractura* entre los verdaderos centros de poder político respecto de las masas populares y de la representación de sus intereses. El resultado de ello es justamente lo que hoy se expresa con firmeza en la superficie como una crisis política, de legitimidad, de representatividad y de gobernabilidad.

La construcción del discurso de una “nueva forma de hacer política” (IFE –siervo de la tradición más conservadora de la democracia liberal–), con centro en los procesos electorales y la creación de un nuevo “sistema de partidos” desde finales de siglo XX, tuvo por objetivo la despoltización de las clases explotadas, la desorganización y

desarticulación de las fuerzas políticas radicales y la extirpación de los estallidos sociales, ello incluso a través del funcionamiento de los aparatos de Estado, la “apertura” hacia posiciones burocráticas de los partidos de “izquierda” y su “inclusión” en los espacios electorales y cargos públicos –usufructuarios de plusvalía social–.

Los cursos de estas crisis de gobernabilidad, representatividad y legitimidad, sustentados en la creciente firmeza de las luchas sociales y de su impugnación al orden establecido, implican un gran rechazo e impugnación a los mecanismos político-estatales, electorales e institucionales que ofrece el orden social liberal de la “democracia mexicana”.

El Estado liberal Mexicano al arribar a los límites con los que se ha encontrado desde sus cimientos, está imposibilitado de construir una alternativa para la sociedad mexicana. Los caminos y promesas que dibuja la intelectualidad a fin al orden establecido portan la impronta del pensamiento liberal y de su sujeción –fantasiosa– a un estado de “paz social” y de “unidad institucional” en una sociedad atravesada por fuerzas, poblaciones, territorios, sectores y clases sociales irreconciliables, más aun en un régimen que desprecia los derechos e intereses de las clases populares y constantemente le lanza el guante estableciendo “pactos” exclusivamente en las alturas del poder.

## **V. La lucha de clases**

Desde la perspectiva de las clases dominantes se nos impone una “solución” *desde arriba*. Sin un contrincante *de clase* en la escena política, las luchas que se nos han venido presentando son únicamente las que encabezan el *bloque en el poder* como las que se dan contra los empresarios desplazados y marginados por el neoliberalismo, arrojados unos por la cobardía del PRD-PT y otros ahora con el naciente MORENA. El mecanismo es similar, reorganizar mediante el discurso de la socialdemocracia el descontento social e insertarlo políticamente en las rutas del orden del capital, de tal forma que los “extradicales” limpien sus conciencias políticas.

Sin embargo, la verdadera alternativa pasa por las organizaciones de las luchas sociales y las masas populares que desafíen el poder de las clases dominantes y sus estructuras económicas, estatales y culturales. Las clases trabajadoras por su firme gravitación en la reproducción social de tipo capitalista son un sujeto irremplazable en la

confrontación de las clases y las fuerzas sociales contra la hegemonía que el capital ejerce sobre el diseño social.

Sin una fuerza social que incorpore al trabajo y sus intereses inaplazables –aumento real del salario, disminución de la jornada laboral aparejada de un aumento del empleo, eliminación de la precarización laboral– difícilmente se podrá lograr una transformación estructural que logre eliminar los brutales efectos del neoliberalismo y la violencia y fractura social que ha desencadenado, pues es justamente en esas luchas donde se pueden disputar mejoras sociales.

## **Conclusión**

La ceguera y el desprecio de la clase dominante en México respecto a las clases explotadas y las crisis en las que se empantana el Estado, lo arrastran a tratar las contradicciones sociales –cada vez más convulsas– con paliativos en las abstractas figuras de la “confianza”, “voluntad política”, “ética” y la “integridad”, que aporten a superar las “debilidades del Estado de Derecho”. Así también, los intereses privados del bloque en el poder lo arrastran a conducir la barbarie social que el Estado reproduce mediante las insistentes y unilaterales modificaciones de un “Estado de Derecho” de por sí colapsado desde sus cimientos. Se trata ahora, para la clase dominante, de incidir en una “certidumbre” y “seguridad” al capital, en medio de la mayor incertidumbre social acaecida por la inestabilidad y precariedad económica popular.

Para la línea divisoria que se encuentra en las fuerzas de la lucha y resistencia social frente al orden establecido, se yergue una crisis de Estado que exige tomar *el toro por los cuernos*. La crítica radical a las formas de la política liberal y la constitución de formas de organización, cohesión y unidad política entre las organizaciones y las luchas sociales es la alternativa correcta.

Es muy claro que para la clase dominante se trata de fortalecer el enorme pulpo del Estado (incluso de armarlo *hasta los dientes*) para “aprovechar las oportunidades de las reformas”, que en el caso de la desnacionalización y privatización de la enorme riqueza energética, empresas y emporios económicos como Cemex, Minera México, grupo Alfa, Alpek, grupo Carso, Ica, grupo Vitro, Mexichem, entre otras, además de los sectores pertenecientes al capital trasnacional (petrolero, financiero, industrial) están en condiciones

de usufructuar y despojar de territorios a vastos pueblos y comunidades del país configurando mayor fractura y expoliación.

Dentro de este cuadro, la nueva ofensiva manipuladora del capital consiste en la creación de un “compromiso” entre “todos” (CCE) dado que, desde el punto de vista del poder empresarial, el problema de la “seguridad” es una “responsabilidad” “no sólo del gobierno, sino de los ciudadanos en general” (Gerardo Gutiérrez Candiani, CCE).

Paradójicamente, el poder del capital no sólo se desprende de su “responsabilidad” en la creación de una modalidad social de reproducción del capital de la que ha emanado la mayor crisis en la sociedad mexicana manifestada en la fractura y violencia social y en la crisis política y de legitimidad sobre el conjunto institucional del Estado, sino que ahora increpa al “ciudadano en general” y da el manotazo al Estado para la construcción de un “pacto” gatopardista que con siniestra manipulación busca resguardar precisamente el núcleo duro que se esconde bajo estas crisis: la acumulación privada de la riqueza y su corolario en las profundas desigualdades y fracturas que desgarran las relaciones sociales en México.

La actual crisis del Estado mexicano, puede servir de un punto de inflexión para las luchas sociales en México en su labor de frenar esta barbarie y genocidio neoliberal e impulsar transformaciones estructurales. Como lo planteamos en otro momento, *el proyecto clasista del bloque en el poder en México guardan, en lo más insondable de su interior: lobos, ira, sangre, muerte, barbarie*. Para las fuerzas y luchas sociales, es la hora de la unidad política contra el capital.

**¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!**

**México D.F., a 5 de noviembre de 2014.**

**Centro de Documentación y Análisis Materialista,**

**Ernesto *Che* Guevara. (CDAM-ECG)**

<http://cdamcheguevara.wordpress.com/>